

HACIA UN ACUERDO NACIONAL POR LA PAZ

Hoy más que nunca la paz es una exigencia para el país. Desafortunadamente, las recién pasadas campañas electorales la olvidaron, y es una deuda de la clase política con Colombia. Ocho largos años de guerra contrainsurgente, bajo la figura de "Seguridad Democrática", pesó y seguirá pesando en el diseño de las políticas de la élite gobernante. En 1988 el ELN presentó al país una propuesta de humanización de la guerra con el objetivo de excluir a la población del conflicto y protegerla; que se superara el terrorismo de Estado y el gobierno colombiano acogiera los convenios sobre el DIH. Sólo vino a suscribirlos a mediados de la década de los 90.

Con estos planteamientos, y haciendo parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, establecimos diálogos con el Gobierno de César Gaviria Trujillo. En el desarrollo de esta iniciativa, el Gobierno condicionó a la insurgencia a localizarse en un área reducida, y ante la negativa insurgente a tal pretensión, los diálogos se rompieron y Gaviria respondió con la "Guerra Integral" en mayo de 1992.

En el Gobierno de Samper el ELN presentó al país su propuesta de Convención Nacional, como vía para construir los procesos de la nación. Una convocatoria a todos los sectores para discutir los problemas de Colombia y diseñar su futuro de paz, entendida la paz como gran acuerdo nacional que haga viables las transformaciones del país.

En el Gobierno de Pastrana el ELN retomó su propuesta de paz Convención Nacional. Con este propósito se adelantaron diálogos. Se acordó establecer una zona de encuentro, que comprendía las cabeceras municipales de Cantagallo, San Pablo y parte de Santa Rosa del Sur, en el Sur de Bolívar. Los intercambios entre representantes del Gobierno y el ELN comenzaron en el Oriente antioqueño, luego en Cuba y finalmente en el Sur de Bolívar. Cuando dicho acuerdo requería la firma del Gobierno, los paramilitares obligaron a Pastrana a no firmarlo. En contravía de lo acordado, se lanzó una operación militar contra la región donde estaban nuestros negociadores, quienes se replegaron bajo el fuego enemigo, colocando 4 bajas en sus unidades de seguridad.

En el Gobierno de Uribe, el ELN reanudó sus esfuerzos por la paz de Colombia. En la mesa de diálogo se lograron importantes avances. Se estableció una ruta de paz donde el conjunto de la sociedad sería protagonista. Cuando todo parecía resuelto, el Comisionado de Paz gubernamental, Luis Carlos Restrepo exigió al ELN que se concentrara en un lugar, se contabilizara e identificara, como mecanismo de control. Dicha exigencia era absurda, pues existían los mecanismos de control que obligaban a las partes a cumplir sus compromisos. En tales circunstancias, Uribe suspende unilateralmente la facilitación del Presidente Chávez, abortando una vez más la anhelada paz para Colombia.

Luego de ocho años de hecatombe uribista, de exclusión social, de persecución, de guerra, de arrodillamiento ante los gringos y de corrupción exacerbada, los colombianos estamos obligados a construir un camino que nos conduzca a la paz con justicia social, que recupere el ejercicio de la política para la decencia, y donde la participación de todos en el diseño de su destino sea la base para la construcción de la democracia. A la propuesta del nuevo Presidente Santos de "Acuerdo Nacional", las mayorías debemos superar las limitaciones de este acuerdo burgués, levantando la iniciativa de un "Acuerdo Nacional por la Paz" que haga viables transformaciones estructurales de los problemas que han sido causas originarias del conflicto interno, pues mientras ellos vivan, la insurgencia seguirá existiendo.

Dentro de este espíritu amplio, democrático y pluralista, el ELN quiere retomar la construcción de un camino de paz con la participación de todos los colombianos. Seguimos viendo válido el proceso de Convención Nacional, ya que nos permitirá convocarnos a todos los colombianos a discutir los problemas, recrear y construir la democracia participativa y además diseñar caminos de futuro. Todo este proceso podría concluir con una Asamblea Constituyente.

Al Congreso de los Pueblos, al Cabildo Permanente y a todas las expresiones del movimiento social les decimos que valoramos sus esfuerzos por la convergencia popular y nacional, abogamos por la tolerancia y el respeto en medio de la diversidad, que haga viable un gran movimiento nacional que sea el principal soporte en la construcción de la paz y la justicia social. Este proyecto no cabe en los estrechos marcos de unidad oligárquica propuesta por Juan Manuel Santos como remedo del Frente Nacional que condenó a Colombia a una violencia perpetua.

Al Polo Democrático, a los movimientos políticos alternativos, su creación como encuentro de importantes sectores de izquierda generó muchas expectativas en el pueblo que no pueden dejarse decaer. Por el contrario, hay que revitalizarlos, abogando por la unidad del campo popular y democrático, levantando y ampliando las bases programáticas para una nueva Colombia donde la paz se asuma como una bandera nacional.

A las comisiones facilitadoras de paz y de reconciliación nacional, consideramos de gran valor su aporte en los anteriores procesos de paz. Pese a los obstáculos encontrados, no podemos desfallecer. Hoy la paz es una exigencia. Sólo la suma de voluntades la hará posible. Mientras exista el conflicto debemos estar en comunicación, recrear propuestas, iniciativas y buscar salidas.

A la Iglesia colombiana, nuestro reconocimiento por la defensa que hace de los humildes, en particular de las víctimas del conflicto. Hoy se colocan en el orden del día los diálogos pastorales y humanitarios como preámbulo a escenarios de un diálogo nacional. Estamos de acuerdo en que esa labor humanitaria no debe ponerse a consideración de nadie, porque es parte de su condición cristiana y humanitaria.

A las organizaciones de víctimas, su meritoria labor nos merece todo respeto y consideración. La paz de Colombia pasa por reconocer a las víctimas del conflicto y la íntegra aplicación del proceso de Verdad, Justicia y Reparación. A tal propósito, debemos contribuir todos. No podrá existir paz si no se afronta con valor y decisión el drama de todas las víctimas del conflicto para buscar una acertada solución

Al Gobierno nacional le decimos que tiene el reto de ofertar al país un camino hacia la paz, pues el mandato constitucional así lo establece. La insurgencia existe por unas causas sociales, económicas y políticas que los gobiernos no han querido transformar. A ese camino de transformaciones es al que la insurgencia llama construcción de paz, y para ese propósito siempre estaremos dispuestos a dialogar.

Al Parlamento queremos decirle que debería ser la tribuna donde se expresen los movimientos sociales. No puede seguirse suplantando la voluntad popular y legislar sin ningún tipo de consulta a quienes lo eligieron. El Parlamento debe estar abierto a escuchar al conjunto del movimiento social, a discutir los problemas del país y no ser la manguala que ha entregado el país a la corrupción, las mafias y al paramilitarismo.

A Latinoamericanas y Latinoamericanos por la Paz: Sus esfuerzos por el país y el continente se han ganado el reconocimiento de amplios sectores de la opinión nacional e internacional, y es necesario dar un nuevo perfil a una interlocución más directa con el ELN y de cara al país, y junto con otros esfuerzos nacionales e internacionales, abramos las puertas hacia la paz de Colombia.

A Unasur le reafirmamos nuestra solicitud de acompañar la búsqueda de la paz en Colombia, entendida ésta como una necesidad para la estabilidad democrática del continente, y así como se ha escuchado los argumentos del Gobierno colombiano frente al conflicto, consideramos de necesario equilibrio y justeza política, que se escuchen los planteamientos del ELN. Colombia les sabrá agradecer.

Valoramos el concurso y la solidaridad que en oportunidades anteriores países como Cuba, Venezuela, Noruega, Suecia y Suíza, entre otros, han contribuido significativamente en la búsqueda de la paz en Colombia.

Reafirmamos que el ELN está firmemente comprometido con el respeto a las comunidades: a su vida, bienes y organizaciones. Seguirá siendo exigente para que todas sus unidades cumplan este mandato. Estará abierto a escuchar las críticas y dispuesto a rectificar sus errores cuando los haya cometido.

Reiteramos nuestro respeto y acatamiento al DIH, teniendo la voluntad de discutir e intercambiar sobre asuntos particulares del conflicto colombiano con el espíritu de resolverlos. Por último, somos categóricos en reafirmar que no tenemos nada que ver con el narcotráfico. No tenemos cultivos, ni laboratorios, ni redes de transporte o distribución. Para

prueba de ello, no existe ningún registro judicial ni lo habrá, pues nada tenemos que ver con ese fenómeno.

Que Colombia cuente con el ELN para una propuesta de paz que nos deje justicia social y una verdadera democracia.

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás!

¡Liberación o Muerte!